

Revista

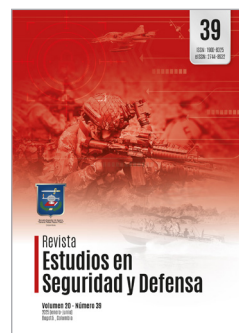
**Estudios en Seguridad y Defensa**

Volumen 20, número 39, enero-junio 2025

Bogotá, D.C, Colombia

ISSN: 1900-8325 • eISSN: 2744-8932

Página web: <https://esdegrevistas.edu.co/index.php/resd>



## Acción integral e impacto social del Ejército: campaña Mi Vereda Modelo en Cuesta Rica, Santander (2018-2019)

Integral action and social impact of the Army: Mi Vereda Modelo campaign in Cuesta Rica, Santander (2018-2019)

Keyla Viviana Jaimes Omaña 

Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º 2, Ejército Nacional de Colombia

### CITACIÓN APA:

Jaimes Omaña, K. V. (2025). Acción integral e impacto social del Ejército: campaña Mi Vereda Modelo en Cuesta Rica, Santander (2018-2019). *Estudios en Seguridad y Defensa*, 20(39), 139-158.

<https://doi.org/10.25062/1900-8325.4796>



Publicado en línea: **Junio 30 de 2025**



[Enviar un artículo a la Revista](#)



Los artículos publicados por la *Revista Estudios en Seguridad y Defensa* son de acceso abierto bajo una licencia *Creative Commons*:  
[Atribución - No Comercial - Sin Derivados](#).



# Acción integral e impacto social del Ejército: campaña Mi Vereda Modelo en Cuesta Rica, Santander (2018-2019)

Integral action and social impact of the Army: Mi Vereda Modelo campaign in Cuesta Rica, Santander (2018-2019)

DOI: <https://doi.org/10.25062/1900-8325.4796>

Keyla Viviana Jaimes Omaña 

Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º 2, Ejército Nacional de Colombia

## Resumen

El corregimiento de Cuesta Rica, en el municipio de Rionegro, Santander, se caracteriza por un contexto histórico enmarcado en el conflicto armado colombiano, lo que evidencia la necesidad de una mayor inversión institucional, presencia de la Fuerza Pública y fortalecimiento de la gobernabilidad mediante acciones no armadas. Este artículo tiene como objetivo socializar el origen de la campaña Mi Vereda Modelo, a partir del estudio de las necesidades identificadas, lo que permite evidenciar las capacidades de la acción integral que facilitaron el acercamiento con las comunidades vulnerables. Se ha buscado estudiar cómo emplea la acción integral la campaña Mi Vereda Modelo como estrategia no armada del Ejército Nacional, implementada en beneficio de las comunidades vulnerables. Se ha empleado una metodología mixta, que permite analizar el impacto social, económico y cultural obtenido tras la implementación de la campaña.

**Palabras Clave:** acción integral; desarrollo comunitario; Ejército Nacional de Colombia; intervención social


The village of Cuesta Rica, in the municipality of Rionegro, Santander, is characterized by a historical context framed by the Colombian armed conflict, which evidences the need for greater institutional investment, presence of the public forces and strengthening of governance through non-armed actions. The objective of this article is to socialize the origin of the Mi Vereda Modelo campaign, based on the study of the identified needs, which allows evidencing the capacities of the integral action that facilitated the approach with vulnerable communities. It seeks to study how the integral action uses the Mi Vereda Modelo campaign as an unarmed strategy of the National Army, implemented for the benefit of vulnerable communities. A mixed methodology has been used, which allows analyzing the social, economic and cultural impact obtained after the implementation of the campaign.

**Key words:** Colombian National Army; Community Development; Integral Action; Social Intervention

## Abstract



Artículo de reflexión

Recibido: 7 de noviembre de 2024 • Aceptado: 17 de marzo de 2025  
Contacto: Keyla Viviana Jaimes Omaña  [viviana.jaimes02@gmail.com](mailto:viviana.jaimes02@gmail.com)

## Introducción

El Ejército Nacional implementa permanentemente dinámicas mediante las cuales supera retos y desafíos propios de la actualidad, fomentando procesos de modernización y adaptación que le permiten dar respuestas oportunas, eficaces y sustentables a los requerimientos estratégicos que surgen del estudio del campo de combate, así como de los entornos nacionales, regionales y mundiales (Rojas, 2017).

Basada en esta necesidad adaptativa, surge la doctrina de acción integral como estrategia no armada, cuyo principal objetivo consiste en la protección de la población y de sus recursos en determinadas áreas geográficas, fortaleciendo la imagen institucional y garantizando la seguridad de los pobladores, así como la continuidad de sus acciones económicas, productivas, sociales, políticas y culturales. En este marco, existen tres líneas de acción integral: general, coordinada y resolutive.

En este contexto, el general Álvaro Valencia Tovar señala que Colombia tiene elementos claros de Acción Integral, como son las necesidades de integrar esfuerzos civiles y militares para un empeño común; la coordinación permanente que debe existir entre las instancias militares y las demás instituciones del Estado —lo que se conoce en la actualidad como la Acción Unificada del Estado— para hacer un trabajo conjunto hacia un mismo objetivo. (Ramírez & Velasco, 2022, pp. 82-83).

En este sentido, y como parte del esfuerzo no armado, surge el programa Fe en Colombia como un ejemplo de ello, al considerarse una iniciativa social del Ejército Nacional que busca integrar y articular instituciones públicas, empresas privadas e incluso actores de cooperación internacional. De esta manera, permite apoyar proyectos productivos y de infraestructura, con el propósito de generar bienestar para los colombianos.

Precisamente, esta es la base del interrogante que se desea responder durante el desarrollo del documento: ¿Cómo emplea la acción integral la campaña “Mi Vereda Modelo” como estrategia no armada del Ejército Nacional, implementada en beneficio de las comunidades vulnerables? Lo anterior, partiendo de estrategias de acción integral que permiten reducir la capacidad de actuación de los Grupos Armados Organizados (GAO) mediante el apoyo a iniciativas productivas, la recuperación de infraestructura comunitaria, la concientización sobre la preservación del medio ambiente, la apertura de espacios comerciales en mercados campesinos y ruedas de negocios, y, por supuesto, la descentralización de servicios públicos y privados en espacios estratégicos a través de las ferias de servicios. Todo ello es apoyado transversalmente por profesionales de comunicación social y diseño gráfico, quienes impulsan la visibilización de estas acciones y resaltan el trabajo que a diario desarrollan cientos de hombres y mujeres en las zonas rurales.

La presente investigación tiene como objetivo exponer el surgimiento de la campaña *Mi Vereda Modelo* a partir del análisis de necesidades y de la ejecución de estrategias

no armadas del Ejército Nacional, siendo el caso de Cuesta Rica, en Santander, el piloto mediante el cual la institución y el equipo de Fe en Colombia proyectan un acercamiento social con la finalidad de afianzar la confianza hacia la institucionalidad.

Para una mayor comprensión del objetivo, es preciso:

- Establecer la contextualización geográfica y socioeconómica tanto del municipio de Rionegro como del corregimiento de Cuesta Rica, en el departamento de Santander.
- Determinar los elementos y actores que generan dificultades en el lugar de investigación.
- Comprender la dinámica entre la comunidad y la institucionalidad que se construyó alrededor de la campaña *Mi Vereda Modelo*.
- Conocer los impactos obtenidos de la implementación y ejecución de la campaña en el corregimiento de Cuesta Rica, Santander.

## Marco teórico

Bajo los preceptos de focalización de esfuerzos y desarrollo a través de la acción unificada, la campaña *Mi Vereda Modelo*, liderada por el Ejército Nacional en cabeza de las unidades territoriales con el apoyo de los Batallones de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo, distribuidos en las ocho divisiones del territorio colombiano, logró ejecutar de manera exitosa su misionalidad en el corregimiento de Cuesta Rica, municipio de Rionegro, departamento de Santander, durante los años 2018 y 2019, convirtiéndose en un modelo para replicar en las demás áreas de interés en coordinación con los equipos de desarrollo comunitario Fe en Colombia.

Para entender el impacto, es indispensable analizar el contexto geográfico y los antecedentes sociales y culturales de la población de Cuesta Rica, comprendiendo las problemáticas, la influencia del conflicto armado, las primeras intervenciones y acercamientos generados por el Ejército Nacional, y concluyendo con la narrativa del proceso de planeación, implementación, ejecución y control de la campaña en este corregimiento vulnerable.

El proyecto investigativo busca visibilizar la primera campaña de *Mi Vereda Modelo*, desarrollada durante los años 2018-2019 en el corregimiento de Cuesta Rica, Santander, sentando un precedente de las actividades que los Batallones de Acción Integral y Desarrollo ejecutan de la mano de su programa Fe en Colombia, en apoyo a las unidades territoriales. Así, proyectan estrategias no armadas basadas en relaciones civiles y militares en pro del bienestar de las comunidades, fortaleciendo la gobernabilidad y reduciendo el margen de actuación de actores ilegales.

## Metodología

Esta investigación posee un carácter mixto, representado por la integración tanto de la perspectiva cualitativa como del enfoque cuantitativo. Parte de la recopilación de información mediante entrevistas y datos textuales provenientes de artículos de investigación, libros y documentos oficiales del Ejército Nacional, en paralelo con la construcción de datos estadísticos obtenidos a partir de la identificación de variables complementarias.

La población corresponde a la comunidad de Cuesta Rica, así como a los asociados de la Acción Unificada del departamento de Santander que participaron activamente en las actividades desarrolladas durante la campaña *Mi Vereda Modelo*, al ser los principales beneficiarios de la misma durante los años 2018-2019. Por ello, las entrevistas se aplicaron tanto a los aliados estratégicos como a los integrantes del equipo de Fe en Colombia del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º 2.

## Condición geográfica y socioeconómica de un municipio en medio del olvido

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) definió el territorio como “el elemento físico o material en donde se asienta la población y constituye el ámbito espacial dentro del cual se ejerce el poder del Estado y donde tienen lugar las dinámicas económicas, sociales, culturales, y políticas de la sociedad” (2011, p. 19). En otras palabras, el territorio corresponde a un conjunto de instituciones, organizaciones y redes sociales que se articulan hacia un objetivo común, orientado al mejoramiento de las condiciones de vida de acuerdo con políticas de desarrollo.

Por esta razón, en el año 2011 se establecieron parámetros para la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como estrategia para potencializar los factores positivos de las regiones y minimizar las tendencias negativas, de acuerdo con recuentos históricos. Precisamente en este marco, el Ejército Nacional enfoca sus actividades, con un énfasis en zonas rurales estratégicas, distantes y caracterizadas por la presencia de GAO.

El departamento de Santander se encuentra ubicado al nororiente del país, conocido por ser una región de gran riqueza histórica, no solo por la tradición indígena representada por pueblos como los Yariguíes, los Guanes, los Chitareros y los Laches, entre otros, sino también por ser el territorio donde se desarrollaron contiendas independentistas, como la Revolución de los Comuneros, reconocida por su importancia en la independencia nacional del dominio español. Actualmente, el departamento posee una estructura administrativa basada en siete provincias regionales y es reconocido por su diversidad climática y productiva.

Sin embargo, aún persisten algunas dificultades regionales, como se expresa en los indicadores oficiales:

En Santander se puede observar actualmente niveles elevados de seguridad y una percepción de superación de las diferentes formas de violencia asociadas al conflicto, tras la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP en el 2016. Pese a ello, las apreciaciones de los actores institucionales, víctimas, organizaciones de la sociedad civil y excombatientes que se encuentran en el departamento, contrastan con la información de las instituciones de seguridad y los discursos gubernamentales. Señalan que el conflicto en Santander no ha terminado, sino que se ha transformado, generando nuevas dinámicas de violencia a nivel territorial. (Instituto CAPAZ, 2021)

Por su parte, el municipio de Rionegro forma parte de la Provincia del Área Metropolitana, ubicada al nororiente de Santander. Limita al norte con los departamentos de César y Norte de Santander; al oriente, con los municipios de Suratá y Matanza; al sur, con Bucaramanga y Girón; y al occidente, con Lebrija. Se trata, por tanto, de un territorio caracterizado por una gran diversidad de pisos térmicos, ya que comprende tanto regiones planas y bajas como zonas montañosas con altitudes de hasta 4000 metros sobre el nivel del mar. En términos históricos, el municipio fue fundado formalmente el 5 de mayo de 1805 por José Gutiérrez Calderón, Facundo y José Mutis, Andrés Ortiz y Enrique Puyana, aunque el caserío existía desde 1545 (Martínez, 2018, p. 28). Por ello, como señala la revista *Semana*:

Rionegro basa su economía principalmente en la cultura cacaotera y cafetera, que le conduce a ocupar el cuarto lugar del Nororiente colombiano y un aliado estratégico para la exportación de los productos principalmente hacia Europa y Asia. Por esta razón comprende una población fuertemente rural, representada en el parque principal con un monumento en honor a los campesinos y sus labores agropecuarias. Sin embargo, su división geográfica permite la existencia de una variedad productiva. En otras palabras, la parte baja se caracteriza por la producción de palma y el desarrollo de actividades ganaderas y petroleras; a su vez, la zona alta presenta cultivos tales como cítricos, cacao, café y aguacate. (*Semana*, 2021)

Dentro del municipio, existe una pequeña región denominada Cuesta Rica, ubicada al nororiente del territorio municipal, con una población aproximada de 1500 habitantes. Limita al noroccidente con el río Cáchira; al sur y al occidente, con la vereda Tamboquemado; y al norte, con el municipio de El Playón, perteneciendo a la Provincia de Soto Norte. Presenta, además, una aproximación con los corregimientos de San Pedro, La Tigra y Vanegas. Su historia es más reciente, siendo el año de 1935 el momento en el cual se inicia la colonización de los terrenos por parte de personas provenientes de veredas vecinas, que identificaron el potencial geográfico en relación con la industria arrocería, cafetera y cacaotera.

## Un territorio entre grupos armados organizados y dificultades rurales

El conflicto colombiano surge a partir de la lucha bipartidista entre liberales y conservadores, partidos políticos tradicionales desde mediados del siglo XIX; sin embargo, sufre una transformación a partir de la década de 1960 con el surgimiento de actores sociales

como las guerrillas, lo que representa un cambio en la actuación del Estado, principalmente desde sus Fuerzas Militares. Este proceso significó una expansión y reubicación del conflicto, así como un cambio en la dinámica de respuesta de la población civil frente a los actores armados.

En otras palabras, la lucha bipartidista y el posterior surgimiento de las guerrillas en el territorio colombiano configuran no solo una concepción desde la teoría del contrato social de Thomas Hobbes<sup>1</sup>, sino que también representan la teoría de la lucha de clases de Marx<sup>2</sup>, según la posición que adopten los participantes en el conflicto nacional. Lo anterior genera un reto para las Fuerzas Militares, que ven a los GAO como un enemigo al cual se debe confrontar no solo mediante medios bélicos, sino también a través de estrategias de acción integral basadas en actuaciones no armadas que permitan sostener la confianza de las comunidades y fomentar el desarrollo de entornos urbanos y rurales.

Basado en estas explicaciones y contextualizando el departamento de Santander, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2016) sostiene que el conflicto y las violencias asociadas no son recientes en este territorio:

La superposición de actores armados en este territorio data, al menos, de la década del setenta. La hegemonía guerrillera y los fracasos por derrotarla militarmente son superpuestos por la presencia de narcotraficantes y su apoyo a proyectos contrainsurgentes, mimetizados a la vez con su negocio ilícito. La penetración paramilitar dejó un sello de silencio, que simbólicamente representa el punto más alto de toda la confrontación armada.

Por ello, Santander es un departamento caracterizado por ser escenario de despojo de tierras, conflictos políticos y violencia social, con más de 250 000 víctimas registradas hasta 2020. Los principales responsables han sido el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En otras palabras, el departamento es considerado un territorio en disputa tanto por guerrillas como por bandas criminales, siendo el botín de esta disputa los corredores estratégicos, la apropiación de recursos ilícitos y lícitos, así como el dominio territorial y la hegemonía en el negocio. El trasfondo del conflicto responde a la ubicación geográfica del departamento, que forma parte del denominado corredor entre el Urabá antioqueño

1 “Dícese que un Estado ha sido instituido cuando una multitud de hombres convienen y pactan, cada uno con cada uno, que a un cierto hombre o asamblea de hombres se le otorgará, por mayoría, el derecho de representar a la persona de todos (es decir, de ser su representante). Cada uno de ellos, tanto los que han votado en pro como los que han votado en contra, debe autorizar todas las acciones y juicios de este hombre o asamblea de hombres, lo mismo que si fueran suyos propios, al objeto de vivir apaciblemente entre sí y ser protegidos contra otros hombres” (Hobbes, 1994, p. 142).

2 “La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y aprendices, en una palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras francas y abierta; lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases beligerantes” (Engels & Marx, s.f.).



y la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, su proximidad con la región del Catatumbo genera un atractivo adicional para los GAO.

La historia del municipio de Rionegro no es muy diferente a la de las demás provincias del departamento y se remonta al período comprendido entre 1965 y 1978, cuando las incursiones en pequeños caseríos fueron uno de los mecanismos de ataque de las guerrillas en territorio colombiano. Por ello, el ELN se concentró en la zona correspondiente al Magdalena Medio santandereano, abarcando centros poblados como Simacota, Puerto Wilches y Rionegro. Posteriormente, la influencia y presencia de las FARC se evidenció a través del Frente 22, en un radio que comprendía la provincia de Rionegro, el Magdalena Medio y Gualivá, caracterizándose por acciones enfocadas en la acumulación de recursos mediante cobros de extorsiones, boleteos, secuestros y asaltos bancarios (*El Tiempo*, 2004).

Como se evidencia, las guerrillas fueron los primeros actores en estar presentes en la región desde la década de 1960:

Habitantes de Rionegro comenzaron a manifestar la circulación de personas identificadas con brazaletes con siglas tales como ELN, EPL y FARC, respectivamente, es decir, primero el ELN se observó con el Frente Claudia Isabel Escobar Jerez, que delinquiró en los municipios del nororiente del departamento, además de Rionegro, en El Playón, Surata, California, Matanza, Vetas y Tona, en la provincia de Soto. Posteriormente, el EPL, con el Frente Ramón Gilberto Barbosa, y una década más tarde, las FARC, con el Frente 22, que además hizo presencia en Surata, Lebrija, El Playón, Sabana de Torres y Puerto Wilches. (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2021).

Zonas como Cimitarra, Rionegro, Simacota, El Carmen, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí se destacan tanto por la existencia de violencia sociopolítica como por los desplazamientos ocurridos durante el período del conflicto colombiano entre 1977 y 1991. En estos municipios, el elevado número de víctimas se presenta por disputas territoriales y por la presencia de diversos grupos insurgentes, siendo los homicidios, las amenazas, las desapariciones forzadas y los secuestros los hechos más frecuentes, especialmente por parte de guerrillas como el ELN y las FARC:

Entre 1988 y 1997 en el territorio hicieron presencia el ELN, las FARC, el EPL, el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y el ERG (Ejército Revolucionario Guevarista). La hegemonía armada fue, para ese período, del ELN y las FARC. Por su parte, el ERP hizo presencia en la subregión de La Mojana, al igual que el ERG. El EPL desarrolló acciones en el bajo Rionegro, en la provincia de Soto Norte, y tuvo incidencia en Barrancabermeja hasta su desmovilización en 1991. (CNMH, 2021, p. 53).

Posteriormente, entre los años 1999 y 2006, el municipio se tipificaba socialmente como territorio de operaciones de las autodefensas, aunque no era el único actor armado ilegal presente en la zona. Es decir, como lo mencionan el Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Bucaramanga y el Tribunal de Tierras de Cúcuta, las guerrillas son consideradas responsables de un gran número de crímenes

y desapariciones (2020). Por ello, las consecuencias que genera el fenómeno armado en las regiones no son necesariamente cuantificables o tangibles, tal como lo señala Martín-Baró (2003):

[...] el tejido social es permeado o modificado a nivel de significados, creencias, memorias, representaciones y emociones políticas colectivas por la carga simbólica (ideológica) de los fenómenos armados; además, es probable que, debido a la constante exposición mediática y cultural a la violencia armada, generación tras generación construyan y/o fortalezcan representaciones sociales basadas en la cultura de la violencia, lo cual no solo sirve para legitimar el uso de la violencia directa y estructural, sino que además impide la consolidación de la paz en Colombia al perpetuar la violencia. (Galtung, 2016, p. 155)

En este marco de normalización de la violencia y presencia de GAO, el Ejército Nacional ha promovido una transformación de un enfoque bélico hacia una aproximación social en búsqueda de la paz, permitiendo su presencia en los diferentes territorios del país a través de intervenciones estructurales, ambientales, productivas, educativas y de otra índole.

En este contexto sociopolítico, caracterizado por una coyuntura de violencia y disputa territorial, donde los esfuerzos militares se enfocaban principalmente en el combate y el enfrentamiento, la implementación de herramientas de desminado humanitario permitió integrar la misionalidad del Ejército Nacional dentro de una posición más humanística, enmarcada en los derechos humanos y en la construcción de confianza social. Asimismo, esta labor se convierte en una primera aproximación de lo que posteriormente se consolidaría como acción integral en el territorio nacional.

## **Retos territoriales en camino a la transformación social**

Las problemáticas sociales acentuadas por la presencia de GAO en el departamento de Santander presentan, en ciertas regiones, una agudización exponencial debido al empleo de herramientas de guerra ilegales que representan un reto para las autoridades policiales, militares y gubernamentales, como las minas antipersonal (MAP). Estas no solo provocan daños físicos y psicológicos en las víctimas directas, sino que también condicionan la normalidad de las comunidades, con implicaciones económicas significativas, al impedir el desarrollo habitual de jornadas productivas.

De acuerdo con el CNMH y la Fundación Prolongar (2017):

Colombia es considerado el segundo país en el mundo con el mayor número de minas antipersonal (MAP) y remanentes explosivos de guerra (REG), precedido únicamente por Afganistán (2017); sin embargo, es lamentable el número de víctimas, en especial aquellas pertenecientes a la Fuerza Pública, siendo ellos los principales afectados, sin discriminar a la población civil que se encuentra catalogada como víctima latente por su desconocimiento en la ubicación de estos. Adicionalmente, este contexto presenta como agravante la condición de ser el único país en América Latina cuyas guerrillas y grupos insurgentes han empleado dichos mecanismos durante el conflicto armado.

Dado el interés internacional por erradicar el uso de las MAP y sus afectaciones, se diseña, implementa y ejecuta

El Tratado de Ottawa para la prohibición del empleo, transporte, fabricación y comercialización de las minas antipersonal, al cual se suscribe Colombia en el año de 1997, implementando el proceso de desminado humanitario, en sus inicios con instituciones de orden nacional, con la creación del Batallón de Desminado Humanitario (BIDES), hoy Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario N°1 (BRDEH), y la Agrupación de Explosivos y Desminado de la Infantería de Marina (AEDIM). En la actualidad, se encuentran además nueve organizaciones del orden civil y algunas internacionales participando en este proceso a lo largo del territorio nacional, en cumplimiento de los requerimientos y normas establecidas para la certificación dada por el Gobierno Nacional. (Muñoz & Ramírez, 2021, p. 73)

Si bien es cierto que las Fuerzas Militares de Colombia emplearon MAP industriales hasta el año 2001, cuando entró en vigor el Tratado de Ottawa, ello representó una transformación en las 30 bases militares donde existían campos minados, los cuales fueron despejados mediante procesos de desminado humanitario entre 2004 y 2010 (CNMH & Fundación Prolongar, 2017, p. 19). Este fue el primer avance en la acción integral enfocado en el respeto de derechos fundamentales, como el derecho a la vida. Sin embargo, la continuidad de esta práctica por parte de los grupos guerrilleros sigue afectando, en la actualidad, el desarrollo y la libre movilidad de las poblaciones, y vulnera los derechos fundamentales de las comunidades implicadas. Además, es importante reconocer que la afectación no presenta una víctima específica, ya que las minas pueden ser detonadas por cualquier persona o animal que active sus mecanismos de funcionamiento.

Por su parte, los GAO incorporaron lentamente el empleo de MAP en su accionar. Aunque en la literatura oficial existen referencias al uso de MAP por parte de las Guerrillas del Llano durante la violencia de los años cincuenta, este parece haber sido un caso puntual que no derivó en una práctica recurrente. Las primeras referencias al uso sistemático de MAP corresponden a la utilización por parte del ELN en El Carmen y en San Vicente de Chucurí (Santander), entre 1974 y 1976 (CNMH & Fundación Prolongar, 2017, p. 42).

La realidad sobre las víctimas de MAP, expuesta por páginas institucionales como *Descontamina Colombia*, demuestra que "en los últimos 28 años la siembra de minas antipersonal en Colombia ha cobrado la vida de 2283 personas y ha causado lesiones graves, incluidas mutilaciones, a 9302 personas, para un total de 11 585 víctimas" (Descontamina Colombia, 2018).

En contraste, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) plantea un contexto estadístico diferente, exponiendo una cifra considerablemente más elevada en comparación con la mencionada por los entes gubernamentales. Según el CICR, se reportaron 11 400 víctimas de MAP en el período comprendido entre 1990 y 2016, de las cuales un 39 % corresponde a población civil, con una tasa de mortalidad del 19 %. Además, se evidencia un recrudecimiento en su uso durante los años 2005 y 2006, período en el cual la confrontación era directa bajo las directrices del gobernante de turno.

Al inicio del milenio, Santander se encontraba dentro de los once departamentos con mayor influencia y accionar de grupos ilegales, focalizado en las actuaciones de guerrillas y grupos de autodefensas. El accionar oculto constituye uno de los principales mecanismos de intimidación, al provocar zozobra y temor en las comunidades víctimas, que desconocen la identidad de los responsables de los hechos (CNMH, 2022). Si bien aceptan su ilegalidad, el desconcierto generado por la continuidad de estos actos y las posibles repercusiones de intentar identificar a los culpables contribuyen a perpetuar el miedo.

Complementariamente, se evidencia una agudización de los casos reconocidos por las entidades gubernamentales, especialmente entre los años 2000 y 2010, siendo 2003 el año más crítico, con aproximadamente 27 víctimas en diferentes zonas del departamento, y con una afectación mayor en San Vicente y El Carmen de Chucurí.

En cuanto a las provincias con el mayor número de casos, se destaca Mares como el lugar donde los grupos ilegales, como las autodefensas, suelen desarrollar acciones en municipios del Magdalena Medio santandereano. Por su parte, los grupos guerrilleros fortalecen su presencia en zonas de predominio rural, donde se distinguen diferentes frentes de las FARC y del ELN.

El Ejército Nacional pretende no solo ser un actor armado; por el contrario, busca una actuación integral en la que la institucionalidad forje bases sólidas para la construcción de la paz, garantizando la cooperación en el provisionamiento de bienes públicos, la asistencia humanitaria y la protección de las riquezas naturales.

La organización de la estructura militar se define a partir de la determinación y la necesidad gubernamental de establecer la seguridad interna del territorio. De ahí que la ausencia de seguridad sea considerada una barrera que impide el progreso de cualquier Estado y que, en caso de no ser regulada, puede convertirse en el detonante de múltiples problemas de orden político, económico y social (Cubides & Garay, 2013).

Bajo la premisa de proteger a la población, la Quinta Brigada ha sido uno de los actores clave en la recuperación de territorios mediante su presencia a través del Batallón de Ingenieros N.º 5 Coronel Francisco José de Caldas. Asimismo, acciones como el desminado humanitario, en cooperación con ayuda internacional a través de entes como la OEA desde 2018, han permitido construir canales de comunicación basados en la confianza y en la garantía de continuidad de los procesos.

Si bien es cierto que la labor aún se encuentra en una etapa de ejecución —puesto que se desconocen los lugares exactos donde fueron instalados los artefactos por parte de grupos guerrilleros, autodefensas y bandas criminales—, el compromiso moral y social que los ingenieros militares adquieren con la población es permanente, siempre

enfocado en el mejoramiento de las condiciones de vida y en la garantía de sus derechos fundamentales.

Con el transcurso de los años, la expansión, el crecimiento y el fortalecimiento de los grupos guerrilleros y de autodefensas, así como su adaptación a nuevos escenarios y su constante mutación, llevaron a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional a adelantar distintos cambios en su doctrina y a transformarse de manera continua para contar con mayores capacidades que les permitieran cumplir con su misión e incrementar su presencia en distintos espacios del territorio nacional (Ministerio de Defensa, 2022).

La campaña *Mi Vereda Modelo* corresponde a una estrategia transversal orientada a la continuidad en el afianzamiento de la seguridad, al fomentar la articulación interinstitucional que permite realizar intervenciones estructurales y ofertas institucionales destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades víctimas del conflicto armado. Lo anterior parte de iniciativas propuestas por miembros de la comunidad, como la que se narra a continuación:

Quando llegué [como profesora a la escuela en Rionegro, Santander] en el 2002, los niños jugaban a guerrilleros y soldados. Entonces me surgió la idea de que había que empezar a cambiarles la modalidad del juego. Lo que hice fue dirigirme a la Gobernación con algunos amigos a conseguir balones y llevarlos para que jugaran fútbol. Pero cada vez que el balón caía a alguno de los costados, toteaba una mina; ahí es cuando me enteró de que la escuela estaba minada. Los chicos sabían más o menos en qué lugares estaban y, bueno, se perdían mucho los balones. Pero estaban tan entusiasmados con el fútbol que queríamos hacer algo para que pudieran jugar y no se les fuera el balón y se les perdiera. (*Vanguardia*, 3 de julio de 2022)

Por ello, la transformación debe orientarse a la creación de nuevas oportunidades para territorios cuya historia presenta cicatrices de guerra y presencia de actores ilegales. Y es precisamente este uno de los objetivos de *Mi Vereda Modelo*: crear espacios de acercamiento entre los diferentes actores participantes (la institucionalidad, la comunidad y las personas asociadas) para unificar esfuerzos que permitan mejorar las condiciones de vida de la población beneficiada.

## **Cuesta Rica, Santander: integrando actores por un sueño**

Fe en Colombia es un programa del Ejército Nacional que fomenta la articulación entre instituciones del Estado, empresas privadas, cooperación internacional y organizaciones sociales (Rojas, 2022). Por consiguiente, dentro de sus objetivos específicos se encuentra la creación de espacios de oportunidad para las comunidades más vulnerables mediante la oferta estatal, con el propósito de dar a conocer programas y proyectos sociales del Estado, así como de responsabilidad social empresarial del sector privado, de la sociedad civil organizada, de las formas de participación comunitaria y del acceso al apoyo de organismos internacionales, con miras a mejorar sus condiciones de vida (Ejército Nacional de Colombia, s. f.) (Figura 1).



**Figura 1.** Equipo de trabajo interinstitucional en Cuesta Rica, Santander.

Fuente: Fe en Colombia (2018)

El rol del programa se cimienta en todos aquellos esfuerzos que han sido planteados e implementados a través de políticas públicas y planes que pretenden dar respuesta a las necesidades básicas insatisfechas (NBI), surgidas de diferentes problemáticas tanto de índole social como económico. El objetivo es generar espacios de gobernabilidad y confianza en las instituciones estatales; no obstante, durante su ejercicio o ejecución, muchas de estas políticas no han tenido el efecto esperado, en especial por su diversidad de enfoques, lo que ha desplazado el interés social de las mismas.

Como lo expone Marcela Urrea, administradora de negocios internacionales del equipo Fe en Colombia (2018):

*Mi Vereda Modelo* es prácticamente una campaña del programa Fe en Colombia, que busca la articulación tanto de la comunidad como de la institucionalidad, fomentando la gobernabilidad. Permitiendo así, a través de la Acción Unificada, dar beneficios inmediatos a la comunidad. Adicionalmente, cuenta con objetivos específicos como la creación de espacios de acercamiento que trabajen mancomunadamente para la obtención de un resultado que beneficie a la población en general, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la zona impactada. (Marcela Urrea, 2018, comunicación personal)

Bajo este criterio, y tras los estudios requeridos tanto de viabilidad como de seguridad, la Segunda División del Ejército Nacional plantea y ejecuta la iniciativa *Mi Vereda Modelo* en el corregimiento de Cuesta Rica, municipio de Rionegro, Santander, generando un impacto positivo a nivel nacional y representando el primer caso realizado y exitoso

de esta campaña interinstitucional de respaldo a la comunidad. Se reconoce el lugar como un punto en la cartografía donde persisten grandes insatisfacciones respecto a las necesidades básicas, acompañado de un contexto histórico conflictivo, pero con una comunidad emprendedora y proyectada hacia nuevas oportunidades.

La campaña es catalogada como una apuesta casi maratónica que demanda tiempo y un trabajo organizado por un equipo interdisciplinario, respaldado siempre por una sinergia interinstitucional conformada por: el Ejército Nacional, que contribuye con su capacidad instalada, músculo en ingeniería e infraestructura, mano de obra y seguridad; la empresa privada, que, a través de sus aportes representados en donaciones y capacitaciones, impulsa a los habitantes de la región a convertirse en emprendedores comunitarios y a generar economías campesinas sostenibles; las universidades, que, mediante actividades académicas prácticas, brindan a la población formación con métodos de aprendizaje profesional en diferentes perspectivas de trabajo aplicado al aprovechamiento de la tierra; y las entidades gubernamentales, que han generado cercanía y construido confianza con la población, llevando su oferta institucional para que la comunidad acceda a diversos beneficios que antes solo estaban disponibles en los cascos urbanos (Rodríguez, 2018, p. 26).

Como socializa Sneider Infante Jaimes en entrevista (asesor de la Gerencia del Hospital San Antonio del municipio de Rionegro en 2018):

[...] el impacto generado a través de *Vereda Modelo* es muy grande, en especial en comunidades que tienen tantas necesidades, iniciando por el acompañamiento de la Fuerza Pública en estas veredas, que provoca que la población sienta confianza y se sientan seguras. Asimismo, ver cómo el turismo, que desde hace mucho se encontraba suspendido, volvía a retomarse allí y beneficiaba a las familias, recuperando la seguridad y la confianza hacia instituciones como el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

Y continúa:

Antes de que llegara esta estrategia, era una vereda muy olvidada, casi que solo la misma comunidad era la que se trasladaba hasta allá. La generación de proyectos socioculturales incentivó a la población a participar en las jornadas de adecuación y recuperación de las viviendas. Eran muchas las necesidades relacionadas con temas de infraestructura, tales como casas o viviendas abandonadas o en notorio deterioro, y el observar que instituciones como el Ejército y la Alcaldía se articulaban para beneficiar a la comunidad, motivó a que cada vez más actores quisieran participar en pro del mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. (Sneider Infante Jaimes, 2023, comunicación personal)

El proceso contiene una serie de fases que permiten coordinar los esfuerzos en pro de la recuperación de las zonas beneficiadas. Por este motivo, es fundamental iniciar con un acercamiento comunitario en el cual se genere un diagnóstico que permita identificar las necesidades insatisfechas y las falencias comunitarias, productivas, escolares, entre otras, proyectando un reconocimiento de la zona y la apertura a la convocatoria institucional.



El proceso se inició el 27 de mayo de 2018, planteando una transformación en las costumbres nocivas para la comunidad que solían representar una afectación en la salud de los pobladores. Es así como la implementación de cocinas ecoambientales proyecta la posibilidad de eliminar el uso de cocinas de leña. Dando paso a un creciente interés por el corregimiento de Cuesta Rica, el día 29 de agosto se realizó la visita oficial por parte del comandante de la Quinta Brigada, en compañía de delegados de la Iglesia Católica, la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Rionegro y el equipo de Fe en Colombia. Esta visita permitió el reconocimiento del territorio y la construcción de un diagnóstico de necesidades que, posteriormente, el 1.º de septiembre, se socializó al presidente de la República, Iván Duque Márquez, así como al comandante del Batallón Ricaurte, especificando las actividades a realizar, así como el cronograma de reuniones y visitas (Fe en Colombia, 2018).

A partir de allí, el año 2018 se convierte en un punto de partida para la formulación de la campaña *Mi Vereda Modelo*, comenzando con la creación del Centro de Coordinación Comunitario (CECOC), organismo creado bajo la doctrina de Acción Integral Nacional (AIN), para realizar la articulación efectiva de la sinergia operacional (AID, Fe en Colombia, Comes, Inteligencia, operaciones, instituciones y comunidad), bajo los lineamientos de la Acción Integral y Desarrollo, como catalizador de la campaña para hacer efectivas las tareas de cooperación y desarrollo y su aporte a la estrategia operacional dentro de la campaña (Protocolo General *Mi Vereda Modelo*, 2019, p. 9).

Es así como se plantean seis frentes de acción para la ejecución de la campaña *Mi Vereda Modelo*.

El *frente de infraestructura* se subdivide, a su vez, en dos bloques de actuación. El primero está relacionado con las vías, donde, a través de tecnologías de la información y la comunicación, se plantea el mejoramiento de la malla vial y de los servicios asociados a dicha transformación, tales como saneamiento básico, energía eléctrica y sistemas de agua y acueducto. El segundo bloque proyecta un impacto sobre las estructuras comunitarias, tales como la escuela, la iglesia, los espacios deportivos, el parque principal, el salón comunal, la biblioteca y el puesto de salud (Figura 2).

Por su parte, el *frente de salud y medio ambiente* está encargado de facilitar los procesos de desarrollo comunitario mediante jornadas médicas, veterinarias, de vacunación y de prevención. Este frente impacta paralelamente el entorno ambiental a través de jornadas de recuperación de cuencas hídricas, actividades de reforestación y campañas de sensibilización sobre la conservación del medio ambiente y la biodiversidad. Complementa estas acciones el *frente de emprendimiento institucional* y su asociatividad gremial, que apoya a los emprendedores impulsando la cadena productiva mediante la organización de mercados campesinos, ruedas de negocios y muestras empresariales.





**Figura 2.** Frente de infraestructura en Cuesta Rica, Santander.

Fuente: Gobernación de Santander (2018)

Adicionalmente, el *frente de educación y deporte* busca fomentar capacitaciones, foros y talleres orientados al mejoramiento de la productividad, así como campañas de alfabetización y festivales lúdicos. Todo lo anterior es gestionado por el *frente de coordinación y articulación* y complementado por el *frente de comunicaciones y publicidad*, encargado de visibilizar las actividades y a los actores participantes, así como de socializar los avances del proyecto y de construir la memoria histórica.

La convocatoria institucional y empresarial se estructura en torno a cuatro ejes funcionales: 1) el *apadrinamiento*, dirigido a proyectos de carácter social; 2) el *voluntariado*, orientado a la búsqueda de material didáctico, así como a la recepción de donaciones de implementos musicales, deportivos, recreativos y vestuario; 3) las *operaciones*, que incluyen las acciones logísticas y operativas necesarias para la ejecución de la campaña, y finalmente 4) la *articulación*, pilar fundamental que proyecta las actividades y enlaza a las entidades participantes para generar resultados satisfactorios para la comunidad seleccionada.

Algunos logros obtenidos mediante la campaña se reflejan en el artículo "*Mi Vereda Modelo, ejemplo de acción unificada*" (Rodríguez, 2018), en el cual se resalta la gestión realizada por la Gobernación de Santander, bajo el liderazgo de sus ingenieros. Esta labor fue crucial, ya que se encargaron principalmente de la parte de infraestructura, que comprendió el mejoramiento de las vías con la construcción de 950 metros de placa huella en los puntos más críticos, la edificación de muros de contención, la instalación de más

de cuatro bateas, obras de alcantarillado y el mejoramiento de puentes que comunican con municipios aledaños, todo lo cual representó un gran beneficio para la comunidad de Cuesta Rica (Figura 3).



**Figura 3.** Proyectos de ingeniería en Cuesta Rica, Santander.

Fuente: Gobernación de Santander (2018)

Asimismo, el Plan Fachada es otro ejemplo representativo, mediante el cual el corregimiento se vistió de diferentes colores como estrategia de embellecimiento y muestra de reconciliación colectiva, enfrentando un pasado conflictivo y doloroso, y dando paso a un futuro prometedor y atractivo para locales y visitantes (Figura 4).



**Figura 4.** Plan Fachada en Cuesta Rica, Santander.

Fuente: Fe en Colombia (2018)

La campaña *Mi Vereda Modelo* en Cuesta Rica se ha convertido en un hito de compromiso comunitario a partir de la cooperación interinstitucional, siendo un modelo replicable en todas las divisiones del Ejército Nacional apoyadas por los equipos de Fe en Colombia, beneficiando a más comunidades vulnerables en el país.

## Conclusiones

Cuesta Rica es un corregimiento de raíces campesinas, constituido por personas pujantes y trabajadoras que durante años vivieron en medio del conflicto armado, con presencia de actores ilegales en sus territorios y con secuelas que aún recuerdan con nostalgia y dolor. Los desplazamientos forzados, las extorsiones, los secuestros, el empleo de MAP e incluso la pérdida de seres queridos fueron hechos cotidianos en una comunidad cada vez más aminorada y temerosa, proyectando una estigmatización que perduró con el paso del tiempo, al ser catalogada como zona roja o peligrosa.

El temor colectivo permeó los núcleos familiares, afectando los vínculos comunitarios y constituyendo una población fragmentada e individualista. Y es en este contexto que el programa Fe en Colombia, a través de la campaña *Mi Vereda Modelo* y en apoyo con las unidades territoriales del Ejército Nacional, logró recuperar la esperanza que hasta ese momento se encontraba perdida, brindando la oportunidad de mejorar las condiciones de vida de todos los sobrevivientes de décadas de limitada presencia estatal.

La acción integral, construyendo sus bases en el relacionamiento cívico-militar, procura el bienestar de la comunidad, buscando soluciones sociales a problemáticas actuales como las necesidades básicas insatisfechas, la recuperación económica, la recuperación de centros educativos, entre otras. Por ello, el desarrollo de la primera *Vereda Modelo* se convierte en un hito no solo por los resultados obtenidos a nivel local y regional, sino también por la necesidad de replicarse en las diferentes divisiones del Ejército Nacional, al ser una propuesta de integración y acercamiento que permite el afianzamiento de las relaciones cívico-militares en favor de la confianza institucional.

El fortalecimiento de la presencia institucional en territorios a través de estrategias no armadas ha permitido que diferentes comunidades a lo largo del territorio nacional recuperen la integración social y vuelvan a generar confianza hacia el Estado y sus instituciones, que se consolidan como garantes de un trabajo continuo. Todo ello contribuye a evitar la repetición de fenómenos relacionados con actividades delictivas de grupos guerrilleros, bandas criminales y autodefensas. En otras palabras, se convierte en una herramienta de reconciliación que otorga garantías de no repetición.

El Ejército Nacional, en su misionalidad de garantizar la seguridad de los colombianos y velar por la soberanía del territorio, ha vivido una transición desde una actuación

bélica y defensiva hacia un accionar integral con compromiso social. Este enfoque complementa su impacto mediante jornadas de trabajo mancomunado que generan espacios de acercamiento comunitario, sin abandonar los valores castrenses y las actividades armadas que permitan minimizar el accionar de los grupos ilegales.

Cuesta Rica constituye un ejemplo de superación en medio de un contexto sociopolítico álgido, al transformar el dolor del conflicto armado en oportunidades de desarrollo y emprendimiento. Lo anterior, enmarcado en un esfuerzo del Ejército Nacional por afianzar su presencia en la zona, desde acciones relacionadas con el desminado humanitario hasta intervenciones enfocadas en la recuperación ambiental, la reactivación económica, productiva y turística, así como en la conservación de valores, costumbres y tradiciones. Todo ello contribuye a construir una memoria histórica colectiva a partir de las experiencias individuales, generando sentido de pertenencia en la comunidad y fomentando la corresponsabilidad en el desarrollo sostenible de la región.

### **Agradecimientos**

La autora desea agradecer al Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo No. 2, al Comando Integral de Acción Integral y Desarrollo, así como a la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, por su apoyo en la realización de este artículo.

### **Declaración de divulgación**

La autora declara que no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con el artículo. Este es un resultado de investigación mixta realizada en colaboración entre el BAAID-2 y las integrantes del equipo de Fe en Colombia en apoyo a los asociados de la Acción Unificada. El proyecto se encuentra supervisado por la Brigada de Acción Integral y Desarrollo N.º 1 y el Comando de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo.

### **Financiamiento**

La autora no declara fuente de financiamiento para la realización de este artículo.

### **Autora**

**Keyla Viviana Jaimes Omaña.** Especialista en gerencia social, Universidad Simón Bolívar, Cucutá, Colombia, y profesional en política y relaciones internacionales, Universidad Sergio Arboleda, Colombia. Historiadora y politóloga del Equipo Fe en Colombia del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo No. 2 (BAAID-2).

<https://orcid.org/0009-0001-8327-5303> - Contacto: [viviana.jaimes02@gmail.com](mailto:viviana.jaimes02@gmail.com)

## Referencias

- Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), & Fundación Prolongar. (2017). *La guerra escondida: Minas antipersonal y remanentes explosivos en Colombia*. <https://tinyurl.com/5fa3sup6>
- Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2021). *Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo I: Bloque Central Bolívar: Origen y consolidación*. <https://tinyurl.com/4nmp7fkr>
- Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2022). *El conflicto armado en cifras, bases de datos*. <https://tinyurl.com/2998tkvz>
- Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2011). *Elementos básicos del Estado colombiano*. <https://tinyurl.com/34pt2tn6>
- El Tiempo*. (2004). El Frente 22 perdió la guerra. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1545715>
- Engels, F., & Marx, K. (s.f.). *El manifiesto comunista*. <https://tinyurl.com/4xywxmr2>
- Fe en Colombia. (2018). *Mi Vereda Modelo: Libro de memoria histórica*.
- Galtung, J. (2016). La violencia: cultural, estructural y directa. *Cuadernos de Estrategia*, 183, 147-168. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5832797>
- Gobernación de Santander - Noticias. (2018). *Avanza la construcción de "Mi vereda modelo"*. <https://tinyurl.com/23lv5dpd>
- Hobbes, T. (1994). *Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil*. Fondo de Cultura Económica.
- Instituto Colombo-Alemán para la Paz - CAPAZ. (2021). *Análisis de situaciones de conflicto en Santander desde la perspectiva de los actores tras la firma del Acuerdo de Paz*. <https://tinyurl.com/29nlxb78>
- Martín-Baró, I. (2003). *Poder, ideología y violencia*. Trotta.
- Martínez, A. (2018). *Alcaldía para el municipio de Rionegro: Diseño arquitectónico del edificio de la Alcaldía municipal de Rionegro, Santander*. Universidad Santo Tomás. <https://tinyurl.com/yndk2udn>
- Ministerio de Defensa Nacional. (2022). *Aporte a la verdad: Contexto de la Fuerza Pública para memoria histórica*. Editorial Planeta; Universidad Sergio Arboleda. <https://tinyurl.com/2rzjudcv>
- Muñoz Villamizar, E., & Ramírez, P. (2022). Desminado humanitario: impacto socioeconómico en el municipio de Sabana de Torres de Santander, Colombia. *Revista de Investigaciones*, 17(1), 71-84. <https://doi.org/10.33304/revinv.v17n1-2022006>
- Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2015). *Una paz estable, duradera y sensible a niños, niñas, adolescentes y jóvenes: Santander*. <https://tinyurl.com/3a9psr59>
- Portafolio. (2019, 27 de mayo). *Ejército Nacional, trabajando por las comunidades más vulnerables*. <https://tinyurl.com/2dhhj97t>
- Ramírez Benítez, E. & Velasco Forero, G. (2022). La acción integral y la evolución de las relaciones civiles-militares en el Ejército colombiano. En T. L. Fonseca-Ortiz, E. A. Castro Aldana, & J. F. Díaz Burgos (Eds.), *Emprendimiento social, innovación y derechos humanos: Una perspectiva desde la acción integral* (pp. 75-99). Sello Editorial ESMIC. <https://doi.org/10.21830/9786289514605.05>
- Rodríguez, F. (2018). *Mi Vereda Modelo: Ejemplo de acción unificada*.
- Rojas Gómez, J. J. (2022). "Fe en Colombia": Aporte al compromiso. Bicentenario del Ejército Nacional para proteger a los colombianos. *Fuerzas Armadas*, 247, 11-20. <https://doi.org/10.25062/0120-0631.648>

- Rojas Guevara, P. J. (2017). Doctrina Damasco: Eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia. *Revista Científica General José María Córdova*, 15(19), 95-119. <https://doi.org/10.21830/19006586.78>
- Rueda, M. (2014). *Desplazamiento forzado*. Centro Nacional de Memoria Histórica. <https://tinyurl.com/mtepf4p4>
- Vanguardia. (2022, 3 de julio). *Especial: La verdad de las víctimas del conflicto armado en Santander*. <https://tinyurl.com/23srzmdx>